



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA

SENTENCIA TC/0616/17

Referencia: Expediente núm. TC-04-2017-0030, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional incoado por Motopréstamos Solano, S. R. L. y Eladio Solano Eusebio contra la Sentencia No. 961, dictada por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, el siete (7) de septiembre de dos mil dieciséis (2016).

En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, República Dominicana, a los dos (2) día del mes de noviembre del año dos mil diecisiete (2017).

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Milton Ray Guevara, presidente; Hermógenes Acosta de los Santos, Ana Isabel Bonilla, Justo Pedro Castellanos Khoury, Jottin Cury David, Rafael Díaz Filpo, Víctor Gómez Bergés, Wilson S. Gómez Ramírez y Katia Miguelina Jiménez Martínez, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 185.4 y 277 de la Constitución y 53 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once (2011), dicta la siguiente sentencia:

I. ANTECEDENTES

Expediente núm. TC-04-2017-0030, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional incoado por Motopréstamos Solano, S. R. L. y Eladio Solano Eusebio contra la Sentencia No. 961, dictada por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, el siete (7) de septiembre de dos mil dieciséis (2016).



República Dominicana

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

1. Descripción de la sentencia recurrida en revisión constitucional

La Sentencia núm. 961, objeto del presente recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional, fue dictada por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, el siete (7) de septiembre de dos mil dieciséis (2016). Mediante dicha decisión, se declaró inadmisibile el recurso de casación incoado por la compañía Motopréstamos Solano, S. R. L.

La indicada sentencia fue notificada a la compañía Motopréstamos Solano, S. R. L., representada por el señor Eladio Solano Eusebio, mediante el Acto núm. 308/2016, del veintinueve (29) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), instrumentado por el ministerial José Daniel Bobes F., alguacil de estrados de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Niños, Niñas y Adolescentes de San Pedro de Macorís.

2. Presentación del recurso en revisión constitucional de decisión jurisdiccional

Los recurrentes, la compañía Motopréstamos Solano, S. R. L. y Eladio Solano Eusebio, interpusieron un recurso de revisión constitucional contra la sentencia descrita precedentemente. El indicado recurso fue incoado mediante instancia recibida el primero (1) de diciembre de dos mil dieciséis (2016). Los alegatos en los cuales se fundamenta el recurso se expondrán más adelante.

El presente recurso de revisión fue notificado a la recurrida, señora Orfelina Mota Mercedes, mediante el Acto núm. 100/2016, del primero (1) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), instrumentado por el ministerial Rubén Jean Carlos Martínez Acosta, alguacil de estrados de la Segunda Sala del Juzgado Especial de Tránsito del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís.



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

3. Fundamento de la sentencia recurrida en revisión constitucional de decisión jurisdiccional

El tribunal que dictó la sentencia recurrida decidió lo siguiente:

PRIMERO: Declara inadmisibile el recurso de casación interpuesto por Motopréstamo Solano y Eladio Solano Eusebio contra la sentencia núm. 184-2015 dictada el 29 de mayo de 2015 por Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo; Segundo: Compensa las costas.

Los fundamentos dados por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia son los siguientes:

Considerando: que, en ese sentido, hemos podido verificar que el presente recurso se interpuso el 10 de julio de 2015, es decir, bajo la vigencia de la Ley núm. 491-08 de fecha 19 de diciembre de 2008, (que modificó los artículos 5, 12 y 20 de la Ley núm. 3726-53, del 29 de diciembre de 1953, sobre Procedimiento de Casación), ley procesal que estableció como una de las condiciones de ineludible cumplimiento para la admisibilidad de este extraordinario medio de impugnación y la cuantía establecida como condenación en la sentencia que se impugna, al disponer la primera parte del literal c), Párrafo II del Art. 5 de la Ley sobre Procedimiento de Casación lo siguiente:

No podrá interponerse el recurso de casación, sin perjuicio de otras disposiciones legales que lo excluyen, contra: las sentencias que contengan condenaciones que no excedan la cuantía de doscientos (200) salarios



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

mínimos del más alto establecido para el sector privado, vigente al momento en que se interpongan el recurso (...).";

Considerando, que vale destacar que la referida disposición legal fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional mediante sentencia núm. TC/0489/15, de 16 de noviembre del 2015, por contravenir el artículo 40.15 de la Constitución de la República Dominicana, difiriendo los efectos de su sentencia por el plazo de un (1) año a partir de su notificación, a fin de evitar afectar el servicio de justicia y la creación de desigualdades en el ejercicio del derecho al recurso; que, posteriormente, mediante sentencia TC/0022/16, del 28 de enero del 2016, el mismo Tribunal Constitucional juzgó que "hasta tanto venza el plazo de un (1) año otorgado por la citada decisión para la expulsión del referido artículo 5, párrafo II, literal c), de la Ley núm. 491-08, que modificó la Ley núm. 3726, sobre Procedimiento de Casación de mil novecientos cincuenta y tres (1953), la misma tendrá constitucionalidad y mantendrá su vigencia, por lo que al ser aplicada por los jueces estas estarán revestidas de una presunción de no vulneración a derechos fundamentales por esta causa"; que el criterio del Tribunal Constitucional se nos impone en virtud del artículo 184 de la Constitución que establece que: "Habrá un Tribunal Constitucional para garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado"; que, por lo tanto, procede valorar la admisibilidad del presente recurso de casación a la luz del Art. 5, Párrafo II, literal C de la Ley núm. 3726, del 29 de diciembre de 1953, sobre Procedimiento de Casación, modificada por la Ley núm. 491-08, del 16 de diciembre de 2008, que aún se mantiene vigente hasta el vencimiento del plazo otorgado por el Tribunal Constitucional;



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Considerando, que el referido mandato legal nos exige de manera imperativa determinar, por un lado, cuál era el salario mínimo más alto establecido para el sector privado imperante al momento de interponerse el presente recurso y, por otro lado, establecer si el monto resultante de los doscientos (200) salarios excede la condenación contenida en la sentencia impugnada; que, en ese sentido, esta jurisdicción ha podido comprobar que para la fecha de interposición del presente recurso, esto es, como señalamos anteriormente, el 10 de julio de 2015, el salario mínimo más alto para el sector privado estaba fijado en doce mil ochocientos setenta y tres pesos dominicanos (RD\$12,873.00) mensuales, conforme a la Resolución núm. 1/2015, dictada por el Comité Nacional de Salarios en fecha 20 de mayo de 2015, con entrada en vigencia el 1 de junio de 2015, por lo cual el monto de doscientos (200) salarios mínimos asciende a la suma de dos millones quinientos setenta y cuatro mil seiscientos pesos dominicanos (RD\$2,574,600.00), por consiguiente, para que sea admitido el recurso extraordinario de la casación contra la sentencia dictada por la corte a qua es imprescindible que la condenación por ella establecida sobrepase esa cantidad;

Considerando, que al proceder a verificar la cuanta de la condenación, resulta que: a. en ocasión de una demanda en devolución de valores y reparación de daños y perjuicios interpuesta por Orfelina Mota Mercedes contra Eladio Solano Eusebio y Motopréstamo Solano el tribunal de primera instancia apoderado condenó a la parte demandada a la devolución de doscientos setenta y cinco mil pesos dominicanos (RD\$275,000.00) y al pago de una indemnización de ochocientos mil pesos dominicanos (RD\$800,000.00) a favor de la demandante, condenaciones que totalizan la cantidad de un millón setenta y cinco mil pesos dominicanos (RD\$1,075,000.00); b. dicha condenación fue confirmada por la corte a qua mediante la sentencia ahora recurrida en casación; que evidentemente, dicha cantidad no excede del valor resultante de los doscientos (200) salarios



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

mínimos, que es la cuantía requerida para la admisión del recurso de casación y de conformidad con las disposiciones revistas en la primera parte del literal c), Párrafo II del Art. 5 de la Ley sobre Procedimiento de Casación; que, en atención a las circunstancias referidas, al no cumplir el presente recurso de casación con el mandato de la ley, respecto al monto mínimo que debe alcanzar la condenación contenida en la sentencia impugnada para ser susceptible del recurso que nos ocupa, procede que esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia declare su inadmisibilidad lo que hace innecesario el examen de los medios de casación propuestos por los recurrentes, en razón de que las inadmisibilidades, por su propia naturaleza, eluden el conocimiento del fondo de la cuestión planteada, en el presente caso, el examen del recurso de casación de que ha sido apoderada esta Sala;

4. Hechos y argumentos jurídicos del recurrente en revisión constitucional de decisión jurisdiccional

Los recurrentes en revisión constitucional, la compañía Motopréstamos Solano, S. R. L. y Eladio Solano Eusebio, pretenden que se declare nula la sentencia recurrida y, para justificar dicha pretensión, alegan que:

a. Que en la sentencia recurrida se incurrió

Violación al principio de denegación de justicia. CONTRADICION DE UN FALLO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA CON UN FALLO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, según sentencia 0219-2013, que anula la norma que fija el monto de 200 salarios mínimo del más alta establecido en el sector privado vigente al momento que se interponga el recurso para recurrir en casación. Violación a la sentencia 0219-2013 del Tribunal Constitucional, que anula norma que fija monto de 200 salarios para recurrir en casación. Inobservancia o errónea aplicación de disposiciones de orden



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

legal y Constitucional. "Sentencia manifiestamente infundada". Violación a la Tutela Judicial Efectiva y al debido Proceso de Ley. Violación al principio de igualdad ante la Ley.

b. Que, además, en la sentencia recurrida, se hizo una

[E]rrónea aplicación de los artículos 1304, 1315, del Código Civil Dominicano, los artículos 44, 45 y 46 de la ley 834, del 15 de Julio del 1978, y los artículos 38, 39, 40.15, 51, 59, 68, 69, 73, y 74 de la Constitución de la República y el artículo 8.2.h de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 14.5 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.

c. *[P]roducto de la actividad jurídica de los jueces los hoy recurrentes Motopréstamos Solano, y Eladio Solano Eusebio, está sufriendo por la conculcación de los derechos fundamentales al debido proceso de ley, a la igualdad entre las partes, a la igualdad ante la ley, a un Juicio Oral, Público y contradictorio, como consecuencia de la denegación de justicia, que a todas luces es injusta.*

d. *Como consecuencia del error in iudicandum en que han incurrido tanto tribunal de jerarquía inferior como la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, los hoy recurrentes Motopréstamos Solano, y Eladio Solano Eusebio, serán objeto de pagar la cantidad de una indemnización de RD\$800,000.00 para la reparación de daños y perjuicios, así como la devolución de la suma de RD\$275,000.00 pesos, por el solo hecho de satisfacer al señor JEISON HERNANDES de un préstamo por la suma RD\$200,000.00 poniendo en garantía La JEEPETA MARCA SUZUKI, MODELO SO4201VT, AÑO 2005, COLOR NEGRO, MOTOR O SERIE NOJ2OA- 261003, DE CUATRO CILINDROS, CHASIS NO.*



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

JS3TL52VX54LO2790, REGISTRO Y PLACA NO. C37483, MATRICULA NO. 08900155, de su propiedad de este, según se prueba en el contrato de venta de fecha 5/4/2010 y su matrícula y la Certificación de Impuestos Internos.

5. Hechos y argumentos jurídicos de los recurridos en revisión constitucional de decisión jurisdiccional

La recurrida, señora Orfelina Mota Mercedes, no depositó escrito de defensa, a pesar de haberle sido notificado el presente recurso de revisión constitucional, mediante el Acto núm. 100/2016, del primero (1) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), instrumentado por el ministerial Rubén Jean Carlos Martínez Acosta, alguacil de estrados de la Segunda Sala del Juzgado Especial de Tránsito del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, el cual consta depositado en el expediente.

6. Pruebas documentales

El documento más relevante depositado en el trámite del presente recurso en revisión constitucional de sentencia es el siguiente:

1. Sentencia núm. 961, dictada por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia el siete (7) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), objeto del presente recurso de revisión.



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

7. Síntesis del conflicto

En el presente caso, según los documentos y alegatos de las partes, el litigio se originó en ocasión de la compra hecha por la señora Orfelina Mota Mercedes al señor Jeison Hernández, de la Jeepeta marca Susuki, modelo SO420WT, año dos mil cinco (2005), color negro, motor o serie NOJ20A-261003, de cuatro cilindros, chasis núm. JS3TL52VX54102790, registro y placa núm. G37483, matrícula núm. 08900155, por la suma de doscientos setenta y cinco mil pesos dominicanos con 00/100 (\$275,000.00).

El vehículo objeto de la venta fue incautado a la señora Orfelina Mota Mercedes, por parte del Departamento de Recuperación de Vehículos de la Policía Nacional y el Ministerio Público. Por esta razón, la compradora del vehículo interpuso una demanda en devolución de valores, reparación de daños y perjuicios, contra el señor Eladio Solano y, en el curso de dicha demanda, fue demandada en intervención forzosa la compañía Motopréstamos Solano, S. R. L., sociedad de comercio que tenía en su poder la matrícula del vehículo objeto de la compra.

De la indicada demanda fue apoderada la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, tribunal que acogió la referida demanda, mediante la Sentencia Civil núm. 901-2014, del veintiséis (26) de junio de dos mil catorce (2014).

No conformes con la indicada decisión, la compañía Motopréstamos Solano, S. R. L. y el señor Eladio Solano Eusebio, interpusieron un recurso de apelación contra la sentencia descrita precedentemente. En el curso del citado recurso intervino forzosamente el señor Juan A. Tolentino, en su calidad de propietario de la agencia de venta de vehículo Auto Service Kenny. Dicho recurso de apelación fue rechazado,

Expediente núm. TC-04-2017-0030, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional incoado por Motopréstamos Solano, S. R. L. y Eladio Solano Eusebio contra la Sentencia No. 961, dictada por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, el siete (7) de septiembre de dos mil dieciséis (2016).



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

según Sentencia núm. 184-2015, dictada el veintinueve (29) de mayo de dos mil quince (2015). Esta última sentencia fue objeto de un recurso de casación, el cual fue declarado inadmisibile por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, mediante Sentencia núm. 961, del siete (7) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), la cual constituye el objeto del presente recurso de revisión.

8. Competencia

Este Tribunal se declara competente para conocer del presente recurso de revisión constitucional de sentencia, en virtud de lo que establecen los artículos 185.4 y 277 de la Constitución y 53 de la referida Ley núm. 137-11.

9. Inadmisibilidad del recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional

a. La admisibilidad del recurso que nos ocupa está condicionada a que el mismo se interponga en el plazo de treinta (30) días, contados a partir de la notificación de la sentencia, según el artículo 54.1 de la referida Ley núm. 137-11, que establece: *“El recurso se interpondrá mediante escrito motivado depositado en la Secretaria del Tribunal que dictó la sentencia recurrida o en un plazo no mayor de treinta días a partir de la notificación de la sentencia”*. En la especie se cumple este requisito, en razón de que fue notificada a la compañía Motopréstamo Solano, S. R. L., representada por el señor Eladio Solano Eusebio, mediante el Acto núm. 308/2016, del veintinueve (29) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), instrumentado por el ministerial José Daniel Bobes F., alguacil de estrados de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Niños, Niñas y Adolescentes de San Pedro de Macorís.

b. Según los artículos 277 de la Constitución y el 53 de la referida Ley núm. 137-11, las sentencias que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

juzgada, después de la proclamación de la Constitución del veintiséis (26) de enero de dos mil diez (2010), son susceptibles del recurso de revisión constitucional.

c. En el presente caso, se cumple el indicado requisito, en razón de que la sentencia recurrida fue dictada por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia el siete (7) de septiembre de dos mil dieciséis (2016).

d. En el artículo 53 de la Ley núm. 137-11 se establece que el recurso de revisión constitucional procede: 1) cuando la decisión declare inaplicable por inconstitucional una ley, decreto, reglamento, resolución u ordenanza; 2) cuando la decisión viole un precedente del Tribunal Constitucional; y 3) cuando se haya producido una violación de un derecho fundamental.

e. En el presente caso, el recurso se fundamenta en el alegato de denegación de justicia, y violación al derecho al debido proceso y la tutela judicial efectiva, en el entendido de que el tribunal que dictó la sentencia recurrida no debió declarar inadmisibile el recurso de casación, porque el monto de la condenación de la sentencia recurrida en casación ha excedido la cuantía del valor resultante de los doscientos (200) salarios mínimos, cuantía requerida para la admisión del recurso de casación, de conformidad con las disposiciones previstas en la Ley núm. 491-08. De manera tal que, en la especie, se invoca la tercera causal que prevé el referido artículo 53 de la Ley núm. 137-11, es decir, la violación a un derecho fundamental.

f. Cuando el recurso de revisión constitucional está fundamentado en la causal indicada, deben cumplirse las condiciones previstas en el mencionado artículo 53 de la Ley núm. 137-11, las cuales son las siguientes:

- a) Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado formalmente en el proceso, tan pronto quien invoque la violación haya tomado conocimiento de la misma; b) Que se hayan agotado todos los recursos disponibles dentro*



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

de la vía jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya sido subsanada; c) Que la violación al derecho fundamental sea imputable de modo inmediato y directo a una acción u omisión del órgano jurisdiccional, con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que dicha violación se produjo, los cuales el Tribunal Constitucional no podrá revisar.

g. El primero de los requisitos no es exigible en el presente caso, en razón de que materialmente no era posible invocar la alegada violación durante el proceso, en la medida en que dicha violación, según el recurrente, se cometió por primera vez ante el tribunal que dictó la sentencia recurrida, es decir, la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia. Este criterio ha sido establecido por el Tribunal Constitucional en casos anteriores. [(Véase Sentencias TC/0062/13, del diecisiete (17) de abril de dos mil trece (2013); TC/0094/13, del cuatro (4) de junio de dos mil trece (2013)]

h. El segundo de los requisitos también se cumple, porque las sentencias dictadas por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia no son susceptibles de recursos en el ámbito del Poder Judicial.

i. El tercero de los requisitos no se cumple en la especie, ya que las alegadas violaciones no son imputables a la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, que este tribunal se limitó a declarar inadmisibles un recurso de casación, en aplicación de lo previsto en la letra c), párrafo II, del artículo 5 de la Ley núm. 3726, sobre Procedimiento de Casación, que establece que el recurso de casación es inadmisibles cuando la condenación no excede los 200 salarios mínimos más alto del sector privado.

j. Según el recurrente, el hecho de que se declare inadmisibles el recurso de casación contra las sentencias que contengan condenaciones inferiores a 200 salarios mínimos del más alto del sector privado constituye una denegación de



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

justicia y violación al derecho al debido proceso y la tutela judicial efectiva. Como se observa, estamos en presencia de un cuestionamiento directo a la norma, la cual no fue creada por el tribunal que dictó la sentencia sino por el legislador.

k. Sobre esta cuestión, este Tribunal Constitucional estableció mediante la Sentencia TC/0039/15, del nueve (9) de marzo de dos mil quince (2015), que:

9.4. En cuanto a este tercer requisito, respecto de la violación del derecho fundamental imputable al órgano jurisdiccional que emitió el fallo impugnado, se advierte que la referida sentencia núm. 1004, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia el veinticuatro (24) de octubre de dos mil doce (2012), al declarar inadmisibles los recursos de casación del señor Samir Attia, se fundamentó en las disposiciones del literal C, párrafo II, del artículo 5 de la Ley núm. 3726, sobre Procedimiento de Casación de mil novecientos cincuenta y tres (1953), norma jurídica dimanada del Congreso Nacional. En ese sentido, el Tribunal ha fijado su criterio en la Sentencia TC/0057/12, al señalar que la aplicación, por parte de los tribunales, judiciales de normas legales no puede asumirse como una acción violatoria de algún derecho fundamental: La aplicación, en la especie, de la norma precedentemente descrita ha sido apegada a lo dispuesto por el legislador y, en consecuencia, no es imputable a la Suprema Corte de Justicia la comisión de una acción o una omisión cuya consecuencia haya sido la violación de un derecho fundamental [Sentencia TC/0057/12, del dos (2) de noviembre de dos mil doce (2012); Tribunal Constitucional dominicano].

9.8. Por todas estas consideraciones, ha quedado establecido que el presente recurso no cumple con los requisitos que se configuran en el artículo 53, numeral 3, de la Ley núm. 137-11; por tanto, procede declarar inadmisibles los presentes recursos de revisión constitucional de decisión



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

jurisdiccional. (Criterio reiterado en las Sentencias TC/0057/12, TC/0021/16, y TC/0071/16).

1. Cabe destacar, por otra parte, que este Tribunal Constitucional, mediante la Sentencia TC/0489/15, del seis (6) de noviembre, declaró inconstitucional la letra c), párrafo II, del artículo 5 de la Ley núm. 3726, sobre Procedimiento de Casación, la cual fue aplicada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia en el caso que nos ocupa; sin embargo, los efectos de la indicada sentencia fueron diferidos por un período de un (1) año, contado a partir de la fecha de su notificación. En efecto, en la indicada sentencia se estableció que:

8.5.14. En ese sentido, se adoptarán los recaudos para que después del pronunciamiento de la presente decisión, el vencimiento del plazo para la emisión de la normativa reparadora tiene como consecuencia la nulidad del acápite c) párrafo II, artículo 5 de la Ley 491-08. De ahí que concede al Congreso Nacional un plazo de un (1) año contados a partir de la notificación de la presente sentencia, a fin de que legisle en orden a posibilitar que la Suprema Corte de Justicia, previa comprobación del interés casacional, admita y conozca del recurso de casación aun cuando el asunto no supere la cuantía mínima que sea fijada y que para atender al principio de razonabilidad, debe ser menor a los 200 salarios mínimos. Al mismo tiempo, que se faculte al indicado tribunal para limitar que pueda acudirse a su interposición con fines dilatorios, restringiendo el acceso automático por razón de la cuantía cuando su interposición, a juicio de la Suprema Corte de Justicia, carezca de trascendencia jurídica.

8.5.15. La sentencia a intervenir además de exhortativa, será de inconstitucionalidad diferida o de constitucionalidad temporal, por cuanto se ha considerado que la anulación de la disposición legal atacada generaría una situación muy compleja a la Suprema Corte de Justicia, en el sentido de



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

que la expondría a un caos por la carga de trabajo que se generaría, lo cual afectaría también la calidad de la justicia servida. Tal y como este Tribunal expresó en su Sentencia No. TC/0158/13 del doce (12) del mes de septiembre de dos mil trece (2013): “Lo que se trata de evitar es que como consecuencia de un fallo de anulación, se genere una situación aún más perjudicial que la que está produciendo la situación inconstitucional impugnada. Esto permite lo que la jurisprudencia alemana ha llamado “una afable transición” de la declarada situación de inconstitucionalidad al estado de normalidad”.

m. Dado el hecho de que los efectos de la sentencia que declaró la inconstitucionalidad fueron diferidos por un plazo de un año, la norma en cuestión se considera conforme con la Constitución hasta que se venci el mismo, lo cual ocurrió el veinte (20) de abril de dos mil diecisiete (2017), en razón de que la notificación de la sentencia tuvo lugar el diecinueve (19) de abril de dos mil dieciséis (2016), según consta en la Comunicación núm. SCTC-0753-2016, de la Presidencia del Tribunal Constitucional.

n. En el presente caso, la indicada sentencia no tiene efecto jurídico, en la medida que el recurso de casación fue interpuesto el nueve (9) de septiembre de dos mil quince (2015), es decir, antes de que el referido plazo de un año se venciera.

o. En virtud de las motivaciones anteriores, procede declarar inadmisibles el recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional que nos ocupa, porque el presente recurso no cumple con los requisitos que se configuran en el artículo 53, numeral 3, de la Ley núm. 137-11.

Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de los magistrados Leyda Margarita Piña Medrano, primera sustituta; Lino Vásquez Samuel, segundo sustituto; Víctor Joaquín Castellanos Pizano e Idelfonso Reyes, en razón de que no participaron en la



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la Ley. Consta en acta el voto salvado del magistrado Justo Pedro Castellanos Khoury, el cual se incorporará a la presente decisión de conformidad con el artículo 16 del Reglamento Jurisdiccional del Tribunal Constitucional.

Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal Constitucional

DECIDE:

PRIMERO: DECLARAR inadmisibles el recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por la compañía Motopréstamos Solano, S. R. L. y Eladio Solano Eusebio contra la Sentencia núm. 961, dictada por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, el siete (7) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), porque el presente recurso no cumple con los requisitos que se configuran en el artículo 53, numeral 3, de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once (2011).

SEGUNDO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, a los recurrentes, la compañía Motopréstamos Solano, S. R. L. y Eladio Solano Eusebio, a la recurrida, señora Orfelina Mota Mercedes, y a la Suprema Corte de Justicia.

TERCERO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7.6 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once (2011).

CUARTO: DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional.



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Firmada: Milton Ray Guevara, Juez Presidente; Hermógenes Acosta de los Santos, Juez; Ana Isabel Bonilla Hernández, Jueza; Justo Pedro Castellanos Khoury, Juez; Jottin Cury David, Juez; Rafael Díaz Filpo, Juez; Víctor Gómez Bergés, Juez; Wilson S. Gómez Ramírez, Juez; Katia Miguelina Jiménez Martínez, Jueza; Julio José Rojas Báez, Secretario.

La presente sentencia es dada y firmada por los señores jueces del Tribunal Constitucional que anteceden, en la sesión del Pleno celebrada el día, mes y año anteriormente expresados, y publicada por mí, secretario del Tribunal Constitucional, que certifico.

Julio José Rojas Báez
Secretario